**ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL, PARA LA AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL**

Memoria del análisis de impacto normativo

**RESUMEN EJECUTIVO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ministerio/Órgano proponente** | * Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
 | **Fecha** | 21 de enero 2025 |
| **Título de la norma** | Anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal |
| **Tipo de Memoria** | Normal Abreviada x |
| **OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA** |
| **Motivación y objetivos** | Transcurridos cuarenta años desde la promulgación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, surgen nuevas necesidades que es necesario atender para asegurar la adecuación de la estructura y el trabajo de los miembros del Poder Judicial a las realidades del Estado social y democrático de Derecho. Son necesidades que se derivan de las transformaciones que ha experimentado la sociedad y el entorno jurídico en las últimas décadas y que tienen que ver con la preparación, la estructura y los valores de la carrera judicial.La primera finalidad que persigue esta ley es potenciar la excelencia de las personas que accedan a la carrera judicial y fiscal profundizando en el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a estos cargos, en la adecuación de los procedimientos de acceso a la realidad social y académica, así como en la acomodación del número de jueces a las necesidades del país. Para alcanzar este objetivo resulta preciso, en primer lugar, introducir modificaciones en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, que lo configuren como un verdadero centro público de preparación de los procesos de acceso a las carreras judicial y fiscal, y amplíen sus funciones a la concesión de becas para la preparación de estos por aquellas personas que no cuenten con medios suficientes para ello. Se garantizará así la eliminación de cualquier barrera socioeconómica que afecte a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y limite el acceso a estos cuerpos.En segundo lugar, es necesario actualizar los procesos selectivos para el acceso a la carrera judicial y fiscal, de modo que contemplen el examen de las competencias adecuadas para el ejercicio de la actividad jurisdiccional conforme al marco europeo de enseñanzas superiores vigente en la actualidad. Igualmente, esta Ley incrementa la eficiencia de los procesos mediante la introducción de pruebas prácticas y la transparencia mediante ejercicios anonimizados y la grabación de los ejercicios orales. En tercer y último lugar, hay que recordar que la disposición final trigésima tercera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, mandata al Gobierno a presentar a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, un proyecto de ley orgánica que, permitiera acabar con la temporalidad, aumentar el número de efectivos y fortalecer las Carreras judicial y fiscal, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares europeos fijados en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, conforme a la interpretación realizada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.Este anteproyecto de ley orgánica da respuesta a ese mandato, lo que supondrá, por una parte, poner fin a la excesiva temporalidad en el sector de la denominada justicia interina, y por otra, aumentar el número de efectivos en ambas carreras.Por otra parte, la Carrera Judicial demanda mejoras en sus procesos de especialización y promoción profesional que han de ser atendidas. Así, se mejoran los procesos de especialización de jueces y magistrados, concretamente en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer, atendiendo además a los cambios en la competencia de estos últimos órganos operada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Asimismo, se actualizan los sistemas de promoción profesional de jueces y magistrados, sustituyendo el sistema anterior de ascenso, supeditado a la existencia de plazas vacantes, por un sistema de ascenso automático basado en la antigüedad. Este sistema se extrapola a la carrera fiscal introduciendo reformas en su Estatuto Orgánico, aprobado por Ley 50/1981, de 30 de diciembre.Esta ley, además, pretende ahondar en los valores de integridad y trasparencia de la carrera judicial introduciendo reformas en relación con el régimen de incompatibilidades de los miembros de la carrera judicial, el régimen de financiación de las asociaciones judiciales, el funcionamiento de las comisiones y órganos del Consejo General del Poder judicial con competencia en esta materia, así como en la elección y funcionamiento de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.En relación con estas últimas, se mejoran los procesos de elección de sus miembros con la finalidad de que el resultado se acomode más fielmente a la voluntad de los electores, con la elección del candidato que individualmente consideren más adecuado para el ejercicio del cargo. Se introduce también el voto telemático como medio de agilización del proceso electivo y la competencia exclusiva del pleno para la adopción de acuerdos.Por otro lado, y tras los primeros años de funcionamiento de la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial, se considera conveniente ampliar su composición incluyendo nuevos miembros de procedencia no judicial, que sean especialistas y expertos en ética y enriquezcan desde una perspectiva diferente la pluralidad de planteamientos que emanen de la misma. Finalmente, en relación con el colectivo de juezas y jueces sustitutos y magistrados suplentes, se elimina la incompatibilidad para el ejercicio de otras profesiones durante el tiempo que no son llamados para el ejercicio del cargo.  |
| **Análisis de alternativas**  | Los objetivos que se han expuesto, tanto para la carrera judicial como fiscal, exigen una modificación relevante y cualificada en una parte del ordenamiento jurídico, no existiendo una alternativa no regulatoria para su consecución.Se considera adecuada la tramitación y tratamiento en un único proyecto normativo de los distintos cambios y mejoras que se introducen en las carreras judicial y fiscal, a fin de que la ampliación y fortalecimiento de ambas carreras se produzca de forma conjunta y simultánea en el tiempo.  |
| **CONTENIDO**  |
| Esta Ley Orgánica se estructura en una parte expositiva y en una parte dispositiva que consta de dos artículos.El artículo primero modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, mientras que el artículo segundo modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.La parte final de la norma se cierra con una disposición adicional y tres disposiciones finales. La disposición adicional única regula el proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal. La disposición final primera determina la naturaleza de ley orgánica del proyecto normativo, a excepción del artículo segundo, que tendrá carácter de ley ordinaria.La disposición final segunda contempla el título habilitante para la aprobación de esta ley orgánica.La disposición final tercera se refiere a la entrada en vigor. |
| **ANÁLISIS JURÍDICO** |
| **Fundamento jurídico y rango normativo** | El proyecto normativo exige la consideración de una ley orgánica, por cuanto modifica una norma que goza de dicho rango, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. No obstante, la modificación que se opera en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tiene naturaleza ordinaria. |
| **Justificación de la entrada en vigor y vigencia** | La entrada en vigor de esta ley se producirá el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto en lo referido al acceso a las carreras judicial y fiscal por oposición, que lo hará el 1 de enero de 2026. La justificación se encuentra en la necesidad de que el cuerpo de personas opositoras pueda razonablemente adaptarse a los cambios introducidos en el sistema vigente hasta el momento, y que apenas ha cambiado en los últimos veinte años.Finalmente, se prevé que para el cómputo de los plazos máximos de llamamiento de jueces sustitutos que a la fecha de entrada en vigor se encuentren prestando servicios, el *dies a quo* será el siguiente a la entrada en vigor de la presente ley.  |
| **Normas que quedan derogadas** | No se establece la derogación de normas. |
| **ADECUACIÓN AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS** |
| Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 5ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.   |
| **DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN** |
| **Consulta pública** | Sí No x |
| **Audiencia e información públicas** | Sí No x |
| **Informes evacuados** | 1. Acuerdo de Consejo de Ministros de tramitación administrativa urgente, en virtud del artículo 27.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
2. Trámite de audiencia e información pública, de acuerdo con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, por plazo de diez días hábiles.
3. Audiencia a las comunidades autónomas con competencias trasferidas en materia de justicia.
4. Informe del Consejo Fiscal, de acuerdo con el artículo 14.4 j) de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
5. Informe del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 561 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
6. Informe de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de acuerdo con el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
7. Informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
8. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda (artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre).
9. Aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ex artículo 26.5, párrafo quinto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
 |
| **ANALISIS DE IMPACTOS** |
| **Impacto económico** | Efectos sobre la economía en general | La norma no tiene efectos significativos o cuantificables sobre el funcionamiento y desempeño de la economía. |
| **Impacto en materia de competencia****Impacto presupuestario** | En relación con la competencia |  La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. La norma tiene efectos positivos sobre la competencia. La norma tiene efectos negativos sobre la competencia. |
| Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma: Afecta a los presupuestos de la Administración del Estado. Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales. |  Implica un gasto. Implica un ingreso. Implica disminución del gasto. |
| Desde el punto de vista de las cargas administrativas |  Supone una reducción de cargas administrativas que se detallan en el apartado correspondiente de esta MAIN.X Incorpora nuevas cargas administrativas que se detallan en el apartado correspondiente de esta MAIN. No afecta a las cargas administrativas. |
| **Impacto de género** | La norma tiene un impacto  | Negativo Nulo Positivo  |
| **Otros impactos considerados** | Impacto en la infancia y la adolescenciaImpacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidadImpacto en la familia | Negativo Nulo Positivo Negativo Nulo Positivo Negativo Nulo Positivo  |
| Impacto sobre el cambio climático | Negativo Nulo Positivo  |
| **EVALUACIÓN *EX POST*** |
| No se considera necesario llevar a cabo una evaluación *ex post* |

**1. OPORTUNIDAD**

**1.1. Motivación**

El artículo 1 de la Constitución Española afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ya ponía de relieve la importancia del poder judicial en la organización político constitucional del Estado, señalando que “*el Estado de Derecho, al implicar, fundamentalmente, separación de los poderes del Estado, imperio de la Ley como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituye el Poder Judicial del que se ocupa el título VI de nuestra Constitución, configurándolo como uno de los tres poderes del Estado y encomendándole, con exclusividad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan*.”

Del mismo modo, la Constitución Española en su artículo 117 configura la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado como elemento esencial para que la ciudadanía pueda obtener una tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos que reconoce en el artículo 24. Igualmente, el artículo 23.2 establece que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

La Constitución Española dispone en su artículo 122 que la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como el estatuto y el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

Así, el derecho constitucionalmente reconocido a la tutela judicial efectiva requiere como presupuesto necesario para su realización práctica que la planta judicial cuente con órganos suficientes para atender la función jurisdiccional, que esos órganos jurisdiccionales estén provistos de sus correspondientes titulares, y que estos titulares sean ciudadanos y ciudadanas que han accedido a dichos puestos en condiciones de igualdad.

En este sentido, y con la finalidad de permitir que la sociedad española se dotase de Jueces y Magistrados en número suficiente, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, añadió a los procesos de selección de personal judicial mecanismos complementarios, como fue el acceso por concurso-oposición.

Transcurridos cuarenta años desde la promulgación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, surgen nuevas necesidades que es necesario atender para asegurar la adecuación de la estructura y el trabajo de los miembros del Poder Judicial a las realidades del Estado social y democrático de Derecho. Son necesidades que se derivan de las transformaciones que ha experimentado la sociedad y el entorno jurídico en las últimas décadas y que tienen que ver con la preparación, la estructura y los valores de la carrera judicial, y que se aprecian igualmente a la carrera fiscal.

**2. Fines y objetivos perseguidos**

La primera finalidad que persigue esta ley es potenciar la excelencia de las personas que accedan a la carrera judicial y fiscal profundizando en el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a estos cargos, en la adecuación de los procedimientos de acceso a la realidad social y académica, así como en la acomodación del número de jueces a las necesidades del país.

Para alcanzar este objetivo resulta preciso, en primer lugar, introducir modificaciones en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, que lo configuren como un verdadero centro público de preparación de los procesos de acceso a las carreras judicial y fiscal, y amplíen sus funciones a la concesión de becas para la preparación de estos por aquellas personas que no cuenten con medios suficientes para ello. Se garantizará así la diversidad de las personas que accedan y la igualdad de oportunidades entre ellas, con independencia de su situación económica.

En segundo lugar, es necesario actualizar los procesos selectivos para el acceso a la carrera judicial y fiscal, de modo que contemplen el examen de las competencias adecuadas para el ejercicio de la actividad jurisdiccional conforme al marco europeo de enseñanzas superiores vigente en la actualidad. Igualmente, esta Ley incrementa la eficiencia de los procesos mediante la introducción de pruebas prácticas y la transparencia mediante ejercicios anonimizados y la grabación de los ejercicios orales. En tercer y último lugar, hay que recordar que la disposición final trigésima tercera de la Ley Orgánica 1/2025, de 3 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, mandataba al Gobierno a presentar a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, un proyecto de ley orgánica que, garantizando el cumplimiento de los estándares europeos, permitiera acabar con la temporalidad, aumentar el número de efectivos y fortalecer las Carreras judicial y fiscal. La presente Ley Orgánica da respuesta a este mandato, lo que supondrá por una parte poner fin a la excesiva temporalidad en el sector de la denominada justicia interina, y por otra aumentar el número de efectivos en ambas carreras.

Por otra parte, la Carrera Judicial demanda mejoras en sus procesos de especialización y promoción profesional que han de ser atendidas. Así, se mejoran los procesos de especialización de jueces y magistrados, concretamente en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer, atendiendo además a los cambios en la competencia de estos últimos órganos operada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Asimismo, se actualizan los sistemas de promoción profesional de jueces y magistrados, sustituyendo el sistema anterior de ascenso, supeditado a la existencia de plazas vacantes, por un sistema de ascenso automático basado en la antigüedad. Este sistema se extrapola a la carrera fiscal introduciendo reformas en su Estatuto Orgánico a tal fin.

Esta ley, además, pretende ahondar en los valores de integridad y trasparencia de la carrera judicial introduciendo reformas en relación con el régimen de incompatibilidades de los miembros de la carrera judicial, en el funcionamiento de las comisiones y órganos del Consejo General del Poder judicial con competencia en esta materia, así como en la elección y funcionamiento de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

En relación con estas últimas, se mejoran los procesos de elección de sus miembros con la finalidad de que el resultado se acomode más fielmente a la voluntad de los electores, con la elección del candidato que individualmente consideren más adecuado para el ejercicio del cargo. Se introduce también el voto telemático como medio de agilización del proceso electivo y la competencia exclusiva del pleno para la adopción de acuerdos.

Por otro lado, y tras los primeros años de funcionamiento de la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial, se considera conveniente ampliar su composición incluyendo nuevos miembros de procedencia no judicial, que sean especialistas y expertos en ética y enriquezcan desde una perspectiva diferente la pluralidad de planteamientos que emanen de la misma.

Por otra parte, los principios de ética judicial aprobados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial comienzan resaltando, como uno de sus elementos vertebradores, la percepción por la ciudadanía de la independencia del poder judicial y sus integrantes como fundamento básico de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Las Asociaciones Judiciales, conforme a sus fines constitucionales, deben velar igualmente por preservar esa apariencia de imparcialidad, no sólo en sus actividades, sino también en su organización interna y financiación. Desde esta perspectiva, la financiación privada de las mismas puede comprometer dicha apariencia, por cuanto las personas físicas o jurídicas privadas que las financien pueden relacionarse con la administración de justicia, y por ello generarse desconfianza en el resto de justiciables. Se reforma para ello el artículo 401 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, considerando que la financiación pública de las asociaciones judiciales y la proveniente de sus cuotas asociativas debe ser suficiente para que su funcionamiento y actividades puedan desarrollarse con normalidad, y permitiendo en todo caso que concierten créditos con entidades financieras siempre que tengan por finalidad la adquisición de patrimonio para el desarrollo de sus fines asociativos.

Finalmente, en relación con el colectivo de juezas y jueces sustitutos y magistrados suplentes, se elimina la incompatibilidad para el ejercicio de otras profesiones durante el tiempo que no son llamados para el ejercicio del cargo.

**1.3. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**

El Anteproyecto de Ley Orgánica, si bien no es un hito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, guarda relación con el espíritu o finalidad de esta herramienta por cuanto persigue la reducción de la temporalidad (*Componente 11, Reforma 1, del PRTR: Reforma para la modernización y digitalización de la Administración*), poniéndose así fin a la excesiva temporalidad en el sector de la denominada justicia interina.

**1.4. Análisis de las alternativas**

En cuanto a las posibles soluciones alternativas regulatorias, los objetivos que se han expuesto exigen una modificación relevante y cualificada en una parte del ordenamiento jurídico, no existiendo una alternativa no regulatoria para su consecución.

No obstante, se ha valorado la denominada “alternativa cero”, esto es, la inactividad normativa, bajo la premisa (que recoge la Guía Metodológica para la elaboración de la MAIN) de que la opción “no hacer nada” es en todo caso una alternativa que debe considerarse, pues permite tener la referencia de los efectos previstos para el supuesto de inactividad de los poderes públicos.

Lo cierto es que esta alternativa no permite el desarrollo de los aspectos esenciales de la organización y funcionamiento del Poder Judicial que se persiguen esta ley.

Se ha valorado la posibilidad de una tramitación diferenciada de la reforma de sendas leyes, esto es, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre.

No obstante, se considera pertinente y adecuada la tramitación y tratamiento en un único proyecto normativo de los distintos cambios y mejoras que se introducen en las carreras judicial y fiscal, a fin de que la ampliación y fortalecimiento de ambas carreras se produzca de forma conjunta y simultánea en el tiempo.

**1.5. Adecuación a los principios de buena regulación**

En la elaboración de esta ley se han observado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, en primer lugar, se trata de una norma necesaria, ya que constituye el instrumento idóneo y el único posible para alcanzar el objetivo de fortalecer la carrera judicial y fiscal, asegurando el objetivo de adecuar la estructura y el trabajo de los miembros del Poder Judicial y de la fiscalía a las realidades del Estado social y democrático de Derecho. Además, es el instrumento apropiado para dar una respuesta ágil, eficaz y con las máximas garantías jurídicas para alcanzar el doble objetivo que conforman las reformas procesales contempladas en la presente ley.

La primera finalidad que persigue esta ley es potenciar la excelencia de las personas que accedan a la carrera judicial y fiscal profundizando en el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a estos cargos, en la adecuación de los procedimientos de acceso a la realidad social y académica, así como en la acomodación del número de jueces a las necesidades del país.

En segundo lugar, es necesario actualizar los procesos selectivos para el acceso a la carrera judicial y fiscal, de modo que contemplen el examen de las competencias adecuadas para el ejercicio de la actividad jurisdiccional conforme al marco europeo de enseñanzas superiores vigente en la actualidad. Igualmente, esta Ley incrementa la eficiencia de los procesos mediante la introducción de pruebas prácticas y la transparencia mediante ejercicios anonimizados y la grabación de los ejercicios orales.

En tercer lugar, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2025, de 3 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se persigue acabar con la temporalidad, aumentar el número de efectivos y fortalecer las Carreras judicial y fiscal; poniendo fin a la excesiva temporalidad en el sector de la denominada justicia interina, y aumentando el número de efectivos en ambas carreras.

Además, se implementan mejoras en sus procesos de especialización y promoción profesional, y se ahonda en los valores de integridad y trasparencia de la carrera judicial introduciendo reformas en relación con el régimen de incompatibilidades, en el funcionamiento de las comisiones y órganos del Consejo General del Poder judicial con competencia en esta materia, así como en la elección y funcionamiento de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

Por lo que respecta al principio de seguridad jurídica, se garantiza un régimen jurídico coherente, de tal manera que las novedades que se introducen para conseguir los objetivos anteriores permiten atender las nuevas necesidades de los miembros del Poder Judicial y de la carrera fiscal, fruto de las transformaciones que ha experimentado la sociedad y el entorno jurídico en las últimas décadas y que tienen que ver con la preparación, la estructura y los valores de aquéllos.

En cuanto al principio de proporcionalidad, se introduce la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos perseguidos de adecuar la estructura y el trabajo de los miembros del Poder Judicial y de la fiscalía a las realidades del Estado social y democrático de Derecho.

Se cumple también el principio de transparencia. Esta norma ha sido sometida a los correspondientes trámites de participación pública, esto es, el de consulta pública previa y el de audiencia e información pública.

Respecto del principio de eficiencia, la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

**2. CONTENIDO**

**2.1. Articulado**

Esta Ley Orgánica se estructura en una parte expositiva y en una parte dispositiva que consta de dos artículos de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre; una disposición adicional y tres disposiciones finales.

La reforma que se acomete en materia de elección de las Salas de Gobierno prevista en el artículo 151 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio pretende, con carácter principal, facilitar la participación mayoritaria en el proceso de elección de sus miembros, introduciendo la posibilidad de voto telemático junto con el voto presencial. Queda desterrada la opción del voto delegado, cuya procedencia resulta cuestionable. Así, la Junta Electoral Central, a raíz de problemas en procesos electorales recientes, donde varias personas se personaron en la oficina de correos con decenas de sobres con votos, dictó la Instrucción 5/23, de 8 de junio, sobre la interpretación del artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para imponer la exigencia de identificación personal del elector en la entrega del voto en la oficina de correos y en presencia de los funcionarios de correos, con el fin de garantizar que el voto incluido en el sobre se correspondía con la voluntad del votante. Por otro lado, la viabilidad tecnológica del voto telemático es indiscutible desde el momento que las elecciones a la Comisión de Ética Judicial se realizan de este modo sin problemas.

A fin de garantizar que el resultado electoral es el más fiel y completo reflejo de la voluntad de los electores, se modifica el actual sistema de elección por listas de candidatos por un sistema de candidaturas individuales donde el elector podrá votar a un solo candidato, en la convicción de que ello garantizará en mayor medida que la pluralidad de sensibilidades de la carrera judicial dentro de un mismo territorio alcance representación.

Se reduce en el artículo 150 el periodo de ejercicio de sus miembros de cinco a tres años, de manera que exista una mayor rotación en su composición, lo que redundará en beneficio de la participación de todos los jueces, juezas, magistrados y magistradas, en sus órganos de gobierno más inmediatos.

La reforma de los artículos 149.3 y 153 también modifica el funcionamiento de las Salas de Gobierno, que gracias a las nuevas tecnologías se constituirán siempre en formación de Pleno, asegurando de esta manera la posibilidad de que la totalidad de quienes forman parte de ella puedan participar en la toma de decisiones.

 Por otro lado, la modificación que se aborda en el artículo 213.2 en relación con el régimen de incompatibilidades y prohibiciones que afecta a jueces y juezas sustitutos y a magistrados y magistradas suplentes responde a la necesidad de vincular aquél con su razón de ser, que no es otra que evitar simultanear en el tiempo la realización de actividades públicas y privadas que se consideran concurrentes para la función jurisdiccional. Por ello, la incompatibilidad solo cobra sentido cuando de modo efectivo existe simultaneidad temporal, pero no mientras no estén desempeñando un llamamiento, ya que en estos periodos no existen funciones retribuidas. Este es además el sistema que se aplica a los fiscales sustitutos desde la entrada en vigor del Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, por el que se regula el régimen de sustituciones y de medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Fiscal.

 Al contrario de lo que sucede con el acceso a la carrera judicial por el turno de juristas de reconocida competencia, que es objeto de regulación detallada, la Ley Orgánica del Poder Judicial apenas menciona el sistema de acceso por el turno libre. La relevancia constitucional de la función jurisdiccional y la importancia que a este respecto revisten todos los modos de ingreso en la carrera judicial y fiscal exige que las bases del sistema de acceso por el turno libre también sean recogidas de manera expresa.

Por consiguiente, la presente ley orgánica regula de manera detallada los sistemas de acceso en la carrera judicial y fiscal. Este acceso, previsto en los artículos 301 y siguientes, se basa con independencia de su modalidad en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que constituye una garantía básica y relevante de independencia e imparcialidad. El modelo, en lo que se refiere al acceso por la oposición libre, tiene su origen en el artículo 94 de la Constitución de 1869, desde el cual se trasladó a la Ley Orgánica el Poder Judicial de 1870 y -con algunas reformas- se afianza como vía ordinaria de acceso en la actual Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

Son dos las principales reflexiones que cabe realizar desde una perspectiva de mejora del sistema actual. En primer lugar, la selección se realiza en base a pruebas principalmente memorísticas que permiten constatar algunas destrezas fundamentales para la jurisdicción, pero que no potencian y, desde luego, no evalúan otras aptitudes igualmente necesarias para el ejercicio de uno de los poderes del Estado en una sociedad compleja desde un punto de vista jurídico, social, económico y tecnológico. Una sociedad, cuando menos, muy alejada de aquella en la cual se gestó el vigente sistema ordinario de acceso. A modo de ejemplo, repárese que las pruebas actuales, eminentemente orales, no permiten conocer ni evaluar la capacidad de expresión y razonamiento escritos de quien en su vida profesional se dedicará, fundamentalmente, a reflejar por escrito el contenido de su proceso reflexivo de aplicación del Derecho y resolución de los conflictos interpersonales.

El informe sobre la independencia del sistema judicial adoptado por la Comisión de Venecia en su 82ª reunión plenaria (Venecia, 12-13 de marzo de 2010) afirma que: “La independencia de los jueces y, por tanto, la reputación del sistema judicial en una sociedad determinada depende de muchos factores. Además de las reglas institucionales que garantizan esta independencia, la personalidad y la profesionalidad de los jueces son elementos determinantes. La cultura jurídica en su conjunto también es un aspecto esencial. Las reglas institucionales deben concebirse de tal modo que garanticen la selección de jueces altamente cualificados y fiables a nivel personal, y definan un entorno en el cual puedan trabajar sin estar sometidos indebidamente a influencias externas”. Por otro lado, en su Opinión núm. 1 (párrafo 25), el Consejo Consultivo de Jueces Europeos recomienda además “a las autoridades de los Estados miembros responsables de los nombramientos y de las promociones o encargadas de formular recomendaciones en la materia que adopten, hagan públicos o apliquen criterios objetivos para que la selección y la carrera de los jueces estén basados en el mérito, atendiendo a sus calificaciones, su integridad, competencia y eficacia”. Y define el mérito al que se refiere afirmando que “no es sólo una cuestión de conocimientos jurídicos, competencias analíticas o excelencia académica. Su evaluación también debería tener en cuenta la personalidad, el criterio, la accesibilidad, la aptitud para la comunicación, la eficacia en la toma de decisiones, etc. Es indispensable que los jueces tengan sentido de la justicia y de la equidad”. En parecidos términos, en su Informe N.°10 (2007), el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) indicaba: “Hay que subrayar que la evaluación de los jueces supone examinar, no sólo la competencia jurídica y las aptitudes profesionales generales de los jueces, sino también datos más personales, como las cualidades humanas y su sentido de las relaciones con terceros. Si el ejercicio de las funciones judiciales supone un alto grado de competencias técnicas y personales, sería deseable que su identificación sea objeto de un consenso a nivel europeo”.

Por tanto, podemos concluir que los conocimientos que habilitan para el acceso a la carrera y para la promoción de jueces y fiscales deberían estar informados desde una perspectiva que ayude a la contextualización de la función jurisdiccional, con capacidad crítica y conocimiento y sensibilidad social. Es indudable la necesidad de contar con profesionales que dominen amplios conocimientos técnicos, pero también habilidades, conocimientos y capacidades en otros ámbitos, especialmente ahora que los medios tecnológicos a nuestro alcance permiten acceder tanto a la legislación actualizada en todo momento como a distintas bases de datos con jurisprudencia. Ya no se trata tanto de conocer la Ley, que por la propia complejidad el derecho actual se revela harto difícil de conocer con exhaustividad, sino de conocer el Derecho y saber aplicarlo en la solución de los conflictos y en la defensa de los derechos de la ciudadanía. Muchas de estas habilidades pueden fortalecerse y mejorarse durante la fase de formación y selección desarrollada en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos, pero resulta obvio que ya en un momento anterior deben introducirse pruebas que permitan evaluar, desde el primer momento, la aptitud de las personas candidatas en este campo.

En segundo lugar, es preciso un apoyo público e institucional que garantice adecuadamente el principio de igualdad de todas las personas en el acceso a cargos públicos. El tiempo medio de preparación de los exámenes de ingreso en la carrera Judicial y fiscal se sitúa entre los cuatro y cinco años, periodo en el que es difícil compatibilizar la exigencia en la preparación de las pruebas selectivas con la dedicación a una actividad laboral retribuida. A ello debemos añadir la realidad de que en dicho periodo se habrá de hacer frente al coste económico que supone contar con una preparación técnica externa. En estas circunstancias, es fácil colegir que el sistema tradicional no favorece la igualdad en el acceso a la carrera judicial y fiscal, pues no está al alcance de todos mantener durante periodo tan dilatado de tiempo una situación como la descrita. Por ello, resulta conveniente dar carta de naturaleza a los esfuerzos que en los últimos años ha realizado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como algunas administraciones autonómicas, consagrando el sistema de becas en la preparación de estas y otras oposiciones como una de las funciones del Centro de Estudios Jurídicos. Y ello en cuantía y duración suficiente para servir al fin que justificó su creación. Todo ello con la finalidad última de hacer efectivos los derechos y principios que consagra la Constitución Española en sus artículos 23.2 y 103.3, democratizando el acceso al empleo público bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Entrando a analizar las mejoras que se introducen en la oposición libre, ésta se iniciará con un cuestionario tipo test sobre la totalidad del temario. La segunda prueba, de carácter oral, se desarrollará presencialmente ante los miembros del Tribunal evaluador y versará sobre las siguientes materias: derecho constitucional y de la Unión Europea, derecho civil y derecho penal. Esta prueba se registrará en soporte audiovisual. Finalmente, las personas aspirantes se enfrentarán a una tercera prueba escrita y anónima que consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos que versarán sobre derecho procesal y sustantivo. El objetivo de esta última prueba es detectar en el aspirante aquellas otras habilidades, más allá de las puramente memorísticas, que son imprescindibles para una correcta y completa interpretación de las normas jurídicas y para desarrollar de manera óptima la labor de resolución de conflictos. A modo de ejemplo podemos citar destrezas como la lógica deductiva, la capacidad de argumentación, la interrelación de conceptos, la contextualización e integración de la norma jurídica en un supuesto concreto y la transversalidad en la aplicación del conocimiento teórico. De estas mejoras en el sistema se beneficiará, asimismo, la carrera fiscal, dado que la fase de selección por oposición libre se mantiene como común para ambos cuerpos.

Estas reformas disfrutarán de una vacatio legis suficiente para que el cuerpo de personas opositoras pueda razonablemente adaptarse a los cambios introducidos en el sistema vigente hasta el momento, y que apenas ha cambiado en los últimos veinte años.

Quienes superen la oposición libre y opten por la carrera judicial iniciarán a continuación una fase práctica de formación y selección organizada por la Escuela Judicial en la que, como novedad, y para garantizar una formación que abarque los métodos de trabajo propios de los órganos colegiados, se incluye que las prácticas tuteladas en los diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales se amplíen a tribunales de la segunda instancia.

Por lo que se refiere al acceso a la carrera judicial por la categoría de magistrado para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, explicaba la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985 que la previsión de un sistema de acceso para juristas de reconocido prestigio permitiría, de una parte, dotar a la carrera judicial de jueces y magistrados suficientes, y, de otra parte, incorporar a función tan relevante como la judicial a quienes, en otros campos jurídicos, han demostrado estar en condiciones de ofrecer capacidad y competencia acreditadas, consiguiendo con ello la aportación de perspectivas y sensibilidades diferentes que enriquecerían el ejercicio jurisdiccional. Transcurridos cuarenta años desde tal previsión, se ha constatado la incorporación de magníficos profesionales que han incorporado otra visión del Derecho. No obstante, por diversas circunstancias esta incorporación no ha seguido íntegramente las previsiones del legislador, y la falta de convocatorias regulares por el Consejo General del Poder Judicial ha determinado, por una parte, que no se haya cumplido el deseo de que una cuarta parte de la carrera judicial acceda por esta vía y, por otra, que el cuerpo de opositores se haya enfrentado tradicionalmente a una considerable inseguridad. Para subsanar esta anomalía, se establece que las convocatorias sean anuales y simultáneas con las de la oposición libre.

El éxito de esta vía de acceso aconseja abrirla asimismo a la carrera fiscal, por ser de idéntica aplicación las consideraciones expuestas respecto de la carrera judicial, potenciando así el aumento de los efectivos del Ministerio Público con profesionales de acreditada trayectoria y experiencia profesional, a cuyos efectos se modifican en el artículo segundo de esta ley los artículos 37 y 42 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Además, la coincidencia en el tiempo de ambas convocatorias, oposición y concurso oposición, permitirá que la formación en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos sea compartida, al menos parcialmente, entre promociones que ingresan por distintas vías, de modo que podrán compartir conocimientos y experiencias profesionales, favoreciendo una formación más integral e integrada.

En cuanto al contenido del proceso de selección, se mejora anteponiendo una única prueba escrita eliminatoria consistente en la elaboración de un dictamen, de modo que solo entre quienes acrediten la solidez y rigor técnicos exigibles se realizará la baremación de méritos. Se pretende con ello poner en valor el tiempo que debe dedicarse a la preparación técnica de la fase de oposición, a la adquisición de las competencias propias del ejercicio de la función jurisdiccional, al conocimiento de jurisprudencia y doctrina, y a la elaboración de dictámenes donde se desarrollen estos conocimientos con lógica deductiva, capacidad de síntesis y motivación.

El nuevo modelo conseguirá dos objetivos: elevar de forma significativa la calidad técnica de los aspirantes al garantizarse que solo quienes preparen la fase de oposición con rigor, disciplina y profundidad podrán superar la prueba técnica, y, en segundo lugar, se reducirá significativamente la duración de cada proceso selectivo, imprescindible ahora que las convocatorias serán más frecuentes.

Finalmente, se han introducido dos reformas en relación con quienes ingresan a la carrera judicial por concurso oposición. En primer lugar, se prevé que, si bien se incorporarán al escalafón inmediatamente a continuación del último magistrado que hubiese accedido a la categoría, se les reconocerá cinco años de servicios prestados en la categoría de juez en el correspondiente orden jurisdiccional, como reconocimiento a la trayectoria profesional previa acreditada por su participación en el proceso selectivo.

Por otro lado, se elimina la prohibición de ocupar plazas correspondientes a un orden jurisdiccional distinto de aquel por el que hubieran ingresado en la carrera judicial, cuando se trate de puestos o cargos de nombramiento discrecional, pues en la práctica ello suponía la imposibilidad de ocupar plazas tales como presidencias de Audiencias Provinciales o salas y presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras, para quienes hubieran accedido por concurso oposición.

En cuanto a las plazas que hayan de ser convocadas tanto en la oposición libre como en el concurso oposición, corresponderá su fijación a la Comisión de Selección, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en atención a las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y a las disponibilidades presupuestarias, y comprenderá todas las vacantes existentes en el momento de la convocatoria más un número adicional que permita cubrir las que previsiblemente se puedan producir hasta la siguiente convocatoria.

Respecto de la cobertura de las plazas vacantes, una vez superada la fase de oposición o, en su caso, concurso oposición y la fase práctica de formación y selección, los nuevos jueces y magistrados quedarán adscritos a un Tribunal Superior de Justicia con obligación de concursar en el primer concurso que se publique a todas las plazas ofertadas y, en caso de no resultar adjudicatarios, en los sucesivos.

Este sistema se conjuga con el nuevo modelo de ascenso en la carrera judicial ya que se suprime la actual regulación de ascenso por vacante y se sustituye por un sistema de ascenso por tiempo servido en la categoría de juez, en concreto cinco años. Se pretende así mejorar el sistema actual, que demora excesivamente el ascenso de categoría, dificulta la promoción profesional de los jueces de nuevo ingreso en un tiempo razonable y genera una situación de incertidumbre que perjudica el adecuado desempeño de la función jurisdiccional y, de ello derivado, la eficiente organización del servicio público de justicia. Quienes asciendan pueden optar por continuar en la plaza de juez, como en la actualidad, o bien concursar a plazas de magistrado, pero ya consolidando la categoría. Este nuevo sistema de ascenso se extrapola a la carrera fiscal al objeto de que los abogados fiscales asciendan en los mismos términos a la categoría de fiscal a cuyo efecto se modifica en el artículo segundo de esta ley el artículo 37 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Se persigue con la nueva regulación una mayor eficiencia en la cobertura de las plazas vacantes en las distintas unidades judiciales evitando lo que actualmente ocurre con vacantes de larga duración cubiertas por jueces sustitutos. También se evitará que plazas que hayan de ser cubiertas por magistrados queden desiertas en los sucesivos concursos y hayan de ser ofertadas finalmente a jueces recién ingresados en la carrera. Se evita también la desigualdad de trato entre promociones de jueces que acceden por el turno libre y que, en función de la reserva de plazas que se haya efectuado previamente, han ascendido o no a la categoría de magistrados con diferencias temporales en ocasiones muy significativas. Y finalmente, se consigue eliminar con la nueva regulación el conflicto permanente entre promoción/ascenso, turno de juristas y especialidades, ya que las tres se nutrían de las mismas plazas vacantes.

El nuevo sistema no perjudica en absoluto a las nuevas promociones que accedan a la carrera judicial ya que, frente a la situación actualmente existente en que una buena parte de los aprobados quedan durante largo tiempo adscritos a la espera de que se liberen vacantes, con el nuevo sistema los concursos ofertarán un mayor número de plazas, ya que no será preciso reservar cupo alguno, y a todas ellas se podrá optar en igualdad de condiciones, siendo el criterio de adjudicación el orden en el escalafón de los solicitantes. Como es un primer concurso obligatorio, la congelación en la plaza solo alcanza al primer año, transcurrido el cual se podrá concursar nuevamente.

Por otro lado, es preciso corregir ciertas disfunciones que afectan a la carrera profesional y la especialización de determinados jueces y magistrados. Así, se considera más acorde y ajustado al principio de especialización de la carrera judicial modificar los artículos 329 y 330 de la Ley Orgánica del Poder judicial para que en los concursos convocados para la provisión de plazas en los órganos judiciales de la jurisdicción mercantil y con competencia específica en materia de violencia sobre la mujer, tengan preferencia los jueces y los magistrados y magistradas que tengan una experiencia acumulada de, al menos, tres años en los cinco años anteriores en esos órdenes específicos en juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de lo penal con competencia exclusiva en materia de violencia sobre la mujer, y en juzgados de lo mercantil, o seis años en los diez años anteriores cuando se trate de órganos colegiados especializados en estas materias. Ello conlleva la equiparación del régimen legal de los concursos de estas especialidades con el de otras, como la jurisdicción de menores, los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo y los órganos judiciales del orden social, u otras secciones especializadas de Audiencias Provinciales.

El artículo 127 de la Constitución Española, al referirse a las incompatibilidades de los jueces y magistrados, dispone en su número 2 que la ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de estos. En desarrollo de dicho precepto, se modifica el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para exigir que la actividad docente e investigadora cuente en todo caso con licencia de compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial, quien, cuando la docencia consista en la preparación del acceso a la función pública, deberá publicar un registro de jueces y magistrados que desempeñen tal actividad, a fin de facilitar a los opositores el conocimiento de profesionales que lleven a cabo la misma.

La importancia de la ética judicial y la necesidad de establecer unas normas de conducta de los miembros del poder judicial ha sido puesta de relieve por numerosos instrumentos internacionales, entre los que cabe destacar la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial.

Con la aprobación por el Consejo General del Poder Judicial de los Principios de Ética Judicial en 2016, se recogen en un texto los valores y reglas de conducta necesarios para lograr el fin que la Constitución Española asigna a los jueces y magistrados: la tutela de los derechos de la ciudadanía. Se crea simultáneamente, como cierre del sistema, la Comisión de Ética Judicial, órgano independiente cuya finalidad es orientar sobre la interpretación de estos Principios. Su constitución estaba prevista en el artículo 560.1.24ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, sin desarrollar ningún aspecto fundamental de la misma, salvo la previsión que el Consejo General del Poder Judicial asegurara que este dotada de los recursos y medios adecuados para el cumplimiento de sus objetivos.

Se considera necesario introducir en la ley la regulación de la Comisión de Ética Judicial, por su labor fundamental en la interpretación tanto de los principios de independencia, imparcialidad e integridad, como de los modelos de comportamiento relativos a la justicia como prestación de un servicio, tales como la cortesía, la diligencia y la transparencia. La confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del poder judicial es de extrema importancia en nuestra sociedad.

Se introduce a tal fin un nuevo Título IV en el Libro IV, que regula la Comisión de Ética Judicial.

La Comisión de Ética se establece como institución independiente de los órganos de gobierno del poder judicial. Se desvincula su actuación del ámbito disciplinario, por cuanto su actuación no puede interferir en el ejercicio de la potestad disciplinaria ni inmiscuirse en la determinación de la responsabilidad civil o penal de los jueces. Dado su carácter de órgano consultivo, sus actos carecen de fuerza jurídica obligatoria y de efectos vinculantes, desligándolo plenamente del ámbito disciplinario.

Se regula la composición y elección de sus miembros, distinguiendo los miembros judiciales, mayoritarios, de los de procedencia no judicial. Los miembros pertenecientes a la carrera judicial son elegidos mediante voto personal telemático y secreto por los integrantes de esta en servicio activo. Cada elector podrá votar al candidato que estime adecuado entre las categorías judiciales: juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo. El sistema un juez un voto es el instaurado para la elección de los miembros de la Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, al garantizar una mayor representatividad de las diversas formas de entender e interiorizar los estándares de conducta ética judicial.

Los miembros no judiciales serán elegidos por el Congreso y el Senado entre catedráticos en disciplinas relacionadas con la ética. Cada cámara elegirá por mayoría dos expertos. Con la introducción en la Comisión de Ética de expertos cualificados en el campo de la ética se asegura que su composición refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Derecho.

Con el fin de lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada miembro de las respectivas Cámaras votará a un solo candidato. Resultarán elegidos los dos candidatos que obtuvieran el mayor número de votos.

Los integrantes electos de la Comisión de Ética elegirán a la Presidencia entre magistrados del Tribunal Supremo, en un proceso similar y conforme a los estándares de la elección de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

El Centro de Estudios Jurídicos tiene por objeto, entre otras, la selección, formación inicial y continuada de los miembros de la carrera fiscal, el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. Se considera necesario modificar el artículo 434 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, para que la actuación del centro se adelante al momento de la selección, ofreciendo la posibilidad de preparar los exámenes de ingreso a las carreras judicial o fiscal, al ser común a ambas el proceso selectivo, así como del Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y Abogacía del Estado. El reconocimiento del Centro de Estudios Jurídicos como centro público y oficial de preparación complementa la oferta privada, aportando a la labor de preparación altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia.

Asimismo, y de nuevo con la finalidad de garantizar el acceso a la función pública en condiciones de igualdad y así dar cumplimiento a lo prescrito por los artículos 9.2 y 23.2 de la Constitución Española, dicho Centro será el encargado de la concesión de ayudas económicas para la preparación de las oposiciones para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y en el cuerpo de abogados del Estado. Tal función ya era desarrollada por el centro en virtud de las bases reguladoras de las ayudas económicas concedidas hasta la fecha, pero resulta oportuno consagrar legalmente esta función, estableciendo, por otro lado, su compatibilidad con otras ayudas concedidas, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones públicas, organismos o entes públicos. Para que el apoyo público prestado a estas personas resulte adecuado al fin pretendido, la cuantía de estas ayudas no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Además, y con el fin de dotar de una estabilidad económica a los opositores, se establece la posibilidad de solicitarlas durante varios años hasta un plazo máximo de duración de cuatro años.

Por último, además de la formación inicial de los fiscales de nuevo ingreso por el turno libre, el centro asumirá también la de aquellos que accedan por concurso oposición a la carrera fiscal.

Por último, con la finalidad de evitar interpretaciones divergentes sobre su ámbito, se modifica el artículo 51 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, que, a semejanza del artículo 43, se refiere ahora de manera expresa tanto a las cuestiones de competencia positivas como a las negativas.

**2.2. Disposiciones adicionales**

Esta ley contiene una disposición adicional única que regula el proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal.

La disposición final trigésima tercera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, mandata al Gobierno a presentar a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, un proyecto de ley orgánica que, garantizando el cumplimiento de los estándares europeos fijados en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y conforme a la interpretación realizada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, permitiera acabar con la temporalidad, aumentar el número de efectivos y fortalecer las carreras judicial y fiscal.

En relación con la temporalidad en la carrera judicial, la creación de la figura del juez sustituto respondió a la necesidad de contar con jueces que, sin pertenecer a la carrera judicial pero con acreditados méritos y capacidad, pudieran asumir, de manera esporádica y excepcional, las funciones que no podían ser ejercidas por los jueces titulares, ya fuera en situaciones de enfermedad, vacaciones o ausencias por formación, o cuando el aumento de la carga de trabajo exigía adoptar una medida de refuerzo y esta no podía ser atendida por jueces de carrera. Esta figura permitiría así una mayor flexibilidad en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia frente a situaciones imprevistas.

No obstante, aun siendo cierto que en cualquier organización es inevitable una tasa de temporalidad, cuando ésta deviene estructural se distorsiona el propio funcionamiento del sistema y compromete su adecuada prestación, en la medida que impide desarrollar políticas de recursos humanos dirigidas a garantizar la calidad de los servicios públicos.

En este sentido, los últimos datos oficiales registrados por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial de fecha 1 de enero de 2024, elevan a 913 el número de juezas y jueces sustitutos y magistrados suplentes, frente al dato de 5416 jueces y magistrados en activo a la misma fecha. Ello supone un porcentaje de temporalidad en la carrera judicial de un 16,86%. Este porcentaje se eleva a un preocupante 25,0% de porcentaje de cobertura por no titulares en el caso de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y un 18,5% en el caso de los Juzgados de lo Mercantil. Finalmente, contamos con el indicador del número de sentencias que son dictadas en la instancia por jueces sustitutos en relación con las dictadas por magistrados y jueces, y en 2023 los jueces sustitutos dictaron el 13,5% de las sentencias civiles (incluyendo familia) en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción en todo el territorio nacional, el 14,1% de las dictadas en el mismo ámbito territorial en los Juzgados de lo Social y 17,1% de las sentencias dictadas en los Juzgados de Violencia contra la Mujer.

Sin duda, podemos afirmar que la situación se encuentra muy alejada del objetivo fijado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya evaluado favorablemente por la Comisión Europea en la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, de 22 de junio de 2021, que en su componente 11, relativo a la Modernización de las Administraciones Públicas, se refiere a la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Esta realidad en el seno de uno de los poderes del Estado no ha pasado desapercibida a la Comisión europea que, en el marco del procedimiento de infracción (2014) 4334 abierto al Estado español por incumplimientos de la Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, ha alertado en su segunda carta de emplazamiento de 3 de octubre de 2024 sobre la insuficiente trasposición en España de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, anexo a la indicada Directiva en lo que afecta al colectivo de jueces sustitutos y magistrados suplentes. En concreto, y tras el examen del Derecho nacional aplicable a este colectivo, la Comisión concluye que la regulación española no satisface de manera adecuada el objetivo y efecto útil perseguidos, ya que permite la contratación y renovación de jueces sustitutos para cubrir necesidades permanentes, y advierte de la inexistencia tanto de medidas preventivas que impidan el uso abusivo de la temporalidad en la carrera judicial como de medidas sancionadoras al incumplimiento.

La presente ley orgánica aborda, por tanto, en primer lugar, como medidas preventivas destinadas a evitar la utilización abusiva de nombramientos temporales, aquellas reformas de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, que permitirán reforzar y asegurar el carácter temporal de la figura de los jueces sustitutos y magistrados suplentes a casos excepcionales de indudable y estricta necesidad, objetivando y definiendo las causas de llamamiento y delimitando en todo caso el plazo máximo de su duración. A tal fin, se reduce a un año de manera general el plazo máximo de permanencia de un juez sustituto en una plaza vacante, exigiendo su cobertura por personal titular trascurrido aquél.

En segundo lugar, en el ámbito de las medidas efectivas que la Comisión Europea y la doctrina del TJUE reclaman para disuadir y, en su caso, sancionar de forma clara el abuso de la temporalidad, la presente ley regula una única y excepcional convocatoria de procesos selectivos extraordinarios, uno para el acceso en la carrera judicial por la categoría de juez y otro para el acceso en la carrera fiscal por la categoría de abogado fiscal.

El número total de plazas ofertadas se fijará por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes atendiendo, entre otros criterios, a las necesidades estructurales y permanentes de la Administración de justicia. El Consejo General del Poder Judicial en el Plan Estratégico de Recursos Humanos en la Carrera Judicial para el decenio 2023-2032, aprobado en reunión de la Comisión Permanente de fecha 1 de junio de 2023 y cuya actualización fue aprobada el 4 de julio de 2024, cifraba el déficit estructural de la planta de los tribunales en 421 unidades judiciales a fecha 19 de junio de 2024, déficit que esta convocatoria extraordinaria sin duda contribuirá a paliar.

Estos procesos selectivos, con las debidas adaptaciones, se regirán por el sistema de acceso para juristas de reconocida competencia que se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual tiene una dilatada trayectoria desde su implantación, habiendo dado oportunidad al ingreso en la carrera judicial de profesionales con experiencia y solvencia acreditadas.

Por tanto, el sistema de selección será el de concurso oposición, comenzando por un dictamen práctico al que tendrán acceso un número de aspirantes fijado por el Tribunal evaluador teniendo en cuenta las plazas ofertadas. El ejercicio profesional como juez o fiscal sustituto o como magistrado suplente tendrá mayor valor que el ejercicio del resto de profesiones, en atención a la propia naturaleza de las plazas que se ofertan. Superado el dictamen, se baremarán los méritos de los aspirantes conforme a lo regulado en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, para el acceso a la carrera judicial por concurso oposición. Se prevé, a semejanza de lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, una compensación económica para quienes, estando en activo como juez o fiscal sustituto o magistrado suplente, no superen el proceso selectivo de estabilización y vean finalizada su relación con la Administración. Por último, para evitar dilaciones, se establece que la convocatoria de estos procesos selectivos extraordinarios deberá publicarse antes del 31 de diciembre de 2025 y su resolución deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2026.

El sistema así diseñado tiene acomodo en nuestro marco constitucional, en el que no cabe en el seno de la Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente, ya que el acceso a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo que garantice los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad.

Sobre este concurso oposición como proceso excepcional, cabe traer a colación la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad en el acceso a los cargos y empleos públicos (artículo 23.2 CE), que únicamente puede ser exceptuada por razones excepcionales y objetivas. Además, este acceso ha de ordenarse de manera igualitaria en la convocatoria mediante normas abstractas y generales con el fin de preservar la igualdad ante la ley de la ciudadanía, lo que obliga al legislador y a la Administración a elegir reglas fundadas en criterios objetivos y presididos por los cánones de mérito y capacidad que el artículo 103.3 CE dispone (SSTC 67/1989, 27/1991 y 60/1994).

Entre las condiciones que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, han de darse para que no quepa apreciar infracción alguna del principio de igualdad de acceso a cargos y empleos públicos del artículo 23.2 de la Constitución se encuentran, en primer lugar, que se trate de una situación excepcional; segunda, que sólo se acuda a este tipo de procedimientos por una sola vez, pues de otro modo se perdería su condición de remedio excepcional y tercero, que dicha posibilidad esté prevista en una norma con rango legal (STC 12/1999, de 11 de febrero de 1999).

El procedimiento extraordinario de acceso a las carreras judicial y fiscal que la presente ley diseña como único y excepcional se ajusta plenamente a los márgenes de constitucionalidad que el Tribunal Constitucional enuncia, entre otras, en sentencia como la 86/2016, de 28 de abril, que en su fundamento jurídico cuarto señala que «esta excepción a la regla general se ha considerado legítima en supuestos verdaderamente singulares, en los que las especiales circunstancias de una Administración y el momento concreto en el que se celebraban estas pruebas, justificaban la desigualdad de trato entre los participantes, beneficiando a aquéllos que ya habían prestado en el pasado servicios profesionales en situación de interinidad en la Administración convocante. Estos supuestos varían desde la celebración de pruebas restringidas (STC 27/1991, de 14 de febrero) a pruebas en las que se primaba de manera muy notable los servicios prestados en la Administración, pero en uno y otro caso, ha existido siempre justificación de las singulares y excepcionales circunstancias que de manera expresa se explicaban en cada una de las convocatorias (SSTC 67/1989, de 18 de abril; 185/1994, de 20 de junio; 12/1999, de 11 de febrero; 83/2000, de 27 de marzo, o 107/2003, de 2 de junio). En definitiva, para que sea constitucionalmente legítimo establecer un proceso selectivo restringido o uno en el que se prime notablemente un determinado mérito en relación con otros, debe existir una justificación amparada en una situación excepcional, ya que, en otro caso, la desigualdad de trato lesionaría el artículo 23.2 CE (STC 27/2012, FJ 5)».

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha resaltado que esta diferencia en la valoración de los méritos profesionales no puede tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable (STC 107/2003). De esta manera, la presente ley orgánica concede especial valor a los méritos derivados de los años previos de servicio profesional entre los jueces, abogados fiscales sustitutos y magistrados suplentes en relación con el resto de profesiones jurídicas en atención a la naturaleza de las plazas ofertadas, por cuanto ello supone una acreditación objetiva de un mayor conocimiento de las funciones judiciales al haber desempeñado las funciones propias de las plazas objeto del proceso selectivo extraordinario. Implica, en definitiva, una mayor garantía, a priori, para la eficacia en el desempeño del servicio público de Justicia.

La Comisión Europea, en el marco del procedimiento de infracción antes señalado, invita al Estado español, de conformidad con el artículo 258 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, a remitirle sus observaciones en relación con lo que define con rotundidad como incumplimiento de las obligaciones que le corresponden con arreglo a la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, y ello en el plazo de dos meses desde la recepción de la carta con expresa reserva del derecho a emitir, si procede, el dictamen motivado previsto en ese mismo artículo.

Ello conduce a afirmar que para conseguir el efecto útil de la Directiva y completar su trasposición, los procesos selectivos que se regulan en una única y excepcional convocatoria en la disposición adicional única de esta ley como medida disuasoria y preventiva del abuso de la temporalidad son conformes con el artículo 23.2 de la Constitución española en la medida que son abiertos y no hacen imposible el acceso de otros profesionales, no resultando desproporcionado el trato de favor que se concede a quienes han ostentado previamente la condición de juez o fiscal sustituto o magistrado suplente, pues se trata de profesionales que desempeñan las funciones a que se refieren las plazas convocadas (STS 13.7.2004, rec.6492/1999).

**2.3. Disposiciones finales**

La ley se completa con tres disposiciones finales.

La disposición final primera establece el carácter de ley orgánica, a excepción del artículo segundo, que tiene carácter de ley ordinaria.

La disposición final segunda se refiere al título competencial.

La disposición final tercera establece la entrada en vigor de la norma.

**3. ANÁLISIS JURÍDICO**

**3.1. Fundamento jurídico y rango normativo**

El proyecto normativo exige la consideración de una ley orgánica, por cuanto modifica una norma que goza de dicho rango, esto es, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. No obstante, la modificación que se opera en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tiene naturaleza ordinaria.

**3.2. Justificación de la entrada en vigor y vigencia**

La entrada en vigor de esta ley se producirá el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto en lo referido al acceso a las carreras judicial y fiscal por oposición, que lo hará el 1 de enero de 2026.

La justificación se encuentra en la necesidad de que el cuerpo de personas opositoras pueda razonablemente adaptarse a los cambios introducidos en el sistema vigente hasta el momento, y que apenas ha cambiado en los últimos veinte años.

Finalmente, se prevé que para el cómputo de los plazos máximos de llamamiento de jueces sustitutos que a la fecha de entrada en vigor se encuentren prestando servicios, el *dies a quo* será el siguiente a la entrada en vigor de la presente ley.

**4. ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN COMPETENCIAL**

Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.

**5. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN**

1. Acuerdo de Consejo de Ministros de tramitación administrativa urgente, en virtud del artículo 27.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

2. Trámite de audiencia e información pública, de acuerdo con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, por plazo de diez días hábiles.

3. Audiencia a las comunidades autónomas con competencias trasferidas en materia de justicia.

4. Informe del Consejo Fiscal, de acuerdo con el artículo 14.4.j) de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

5. Informe del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 561 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

6. Informe de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de acuerdo con el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

7. Informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

8. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda (artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre).

9. Aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ex artículo 26.5, párrafo quinto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

**6. ANÁLISIS DE IMPACTOS**

**6.1. Impacto económico**

La ley no tiene impacto económico general que pueda ser mensurable o determinable. Sus fines, que persiguen la mejora de la Justicia, modernizando aspectos organizativos y funcionales de ella, como son el acceso a sus cargos, los procesos de selección o la reducción de la temporalidad en los puestos de las carreras judicial y fiscal, contribuyen sin duda a disminuir los costes de transacción que para la economía en general supone el funcionamiento de la Justicia. No obstante, por la propia permeabilidad y transversalidad de esas mejoras en todos los ámbitos de la economía, siendo su impacto positivo, su cuantificación es en extremo difícil y compleja**.**

**6.2. Impacto sobre la competencia**

La ley no tiene impacto significativo sobre la competencia.

**6.3. Impacto presupuestario**

El contenido con impacto presupuestario de la ley es el relacionado con la disposición adicional única, relativa a la consolidación de empleo temporal de jueces y fiscales sustitutos. Los términos en que se articula la consolidación de empleo de estos colectivos hacen que el impacto presupuestario se vea condicionado por diversas variables, como son: el número de plazas a convocar, el impacto sobre la planta judicial del proceso de consolidación, el número de sustitutos que finalmente consoliden, la reducción efectiva que se produzca en el número de sustitutos que habitualmente prestan servicio, el número de sustitutos que no consoliden plaza y tengan derecho a indemnización por cese, la antigüedad media de quienes cesen con derecho a indemnización, etc…

Así las cosas, los dos componentes de posibles costes presupuestarios son los siguientes:

1. **Coste por retribuciones de las plazas objeto de consolidación a través de la disposición adicional única.**

Si bien la disposición adicional establece que quiénes consoliden y accedan a las carreras judicial y fiscal quedarán, respectivamente, a disposición de un Tribunal de Superior de Justicia y de una Fiscalía de una comunidad autónoma, si bien deben optar a las plazas que se oferten en el primer concurso de traslados de su categoría que se convoquen. Por tanto, el acoplamiento por ambas vías determinará que estos nuevos miembros de las carreras judicial y fiscal finalmente desempeñen puestos que se encuentren vacantes o dónde se produzca el correspondiente cese del sustituto. Esto significa que por esta vía no se producirá incremento de gasto presupuestario.

1. **Coste de las indemnizaciones previstas en el apartado 11 de la disposición adicional única.**

La disposición adicional única establece que:

*“Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades, para los jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos que, estando en activo como tal, no superen el proceso selectivo de estabilización y vean finalizada su relación con la Administración.*

*La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso.”*

Por tanto, los ceses, ya sean con derecho a indemnización o no, se producirán entre el colectivo de sustitutos, que a fecha 30-11-2024 alcanzaba el siguiente número:



Ello sin perjuicio de que, como señala la exposición de motivos, a 1 de enero de 2024, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de jueces sustitutos y magistrados suplentes es de 913. Asimismo, el CGPJ contabiliza el número de sustitutos y suplentes nombrados para el año judicial, no los que estén efectivamente realizando un llamamiento sobre plaza concreta de sustitución, que es el dato que se ofrece a 30-11-2024.

Para conocer el número de ceses potenciales hay que saber el número de plazas a consolidación que se convocarán. Se estima que el número de plazas convocadas serán de 700, de las cuales 450 serán de magistrados y 250 lo sean de abogados fiscales aproximadamente.

En el apartado 11 de la disposición adicional única se encuentra determinado el coste de las indemnizaciones, cuantificado en 20 días de retribuciones fijas por año de servicio prestado, hasta un máximo de 12 mensualidades, para los jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos que, estando en activo como tal, no superen el proceso selectivo de estabilización y vean finalizada su relación con la Administración. Por tanto, serán indemnizables aquellos sustitutos en activo que no superen el proceso y que resulten cesados por cobertura de la plaza que desempeñan,

Según el apartado 4 de la misma disposición adicional, solamente podrían participar en el proceso de consolidación quiénes tuvieran 5 años de servicios prestados y el cese únicamente recaería sobre quiénes no superasen el proceso de consolidación. De esta manera, la indemnización, a quién tuviera derecho a que se le abonase, estaría entre los 100 días de retribuciones fijas -5 años de servicio- y el tope máximo de 365 días. Bajo esas hipótesis, el coste individualizado de indemnización por cada cese con derecho a indemnización estaría en los siguientes intervalos:



No se disponen de datos de los años de servicio de quiénes son sustitutos en este momento, porque esos años de servicio, según la ley, se corresponden a los años de ejercicio profesional, lo que significa que se computan los años prestados como sustituto o en otro tipo de prestación en el sector público o privado. Bajo las siguientes hipótesis, como serían que el número de plazas de consolidación fuesen 700 -450 de magistrado/juez y 250 de abogado fiscal-, que todas las plazas se cubran, que se produzcan 700 ceses y que los cesados tengan al menos cinco años servicios, el coste máximo acumulado de las indemnizaciones sería el siguiente:



Como se ha señalado con anterioridad, esta estimación combina hipótesis de máximos, como son que se producirían tantos ceses como plazas consolidadas, así como que todos los cesados tendrían derecho a indemnización, si bien esa indemnización se estima para 5 años de servicios prestados, que no necesariamente habrían de producirse.

**6.4. Análisis de las cargas administrativas**

Se consideran cargas administrativas todas aquellas tareas de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y los ciudadanos y ciudadanas para cumplir con las obligaciones derivadas de la norma.

El anteproyecto no crea nuevas cargas administrativas ni afecta a las existentes.

**6.5. Impacto por razón de género.**

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el artículo 26.3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se debe realizar un análisis del impacto por razón de género de toda la actividad normativa.

En concreto, se estima un impacto de género positivo.

**6.6. Impacto en la infancia y la adolescencia.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se considera que la norma no tiene impacto en la infancia y la adolescencia.

**6.7. Impacto en la familia.**

A efectos de lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la presente norma no tiene impacto en la familia.

**6.8. Otros posibles impactos en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.**

El anteproyecto tiene un impacto positivo en materia de igualdad de oportunidades.

Así, con la finalidad de garantizar el acceso a la función pública en condiciones de igualdad y dar cumplimiento a los mandatos constitucionales recogidos en los artículos 9.2 y 23.2 de la Constitución Española, se encomienda al Centro de Estudios Jurídicos la concesión de ayudas económicas para la preparación de las oposiciones para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y en el cuerpo de abogados del Estado.

Si bien este cometido ya era desarrollado por el centro en virtud de las bases reguladoras de las ayudas económicas concedidas hasta la fecha, este anteproyecto viene a consagrar legalmente esta función, estableciendo, por otro lado, su compatibilidad con otras ayudas concedidas, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones públicas, organismos o entes públicos.

Además, y con el fin de dotar de una estabilidad económica a los opositores, se establece la posibilidad de solicitarlas durante varios años hasta un plazo máximo de duración de cuatro años.

**6.9. Impacto por razón de cambio climático.**

De acuerdo con lo previsto en el párrafo h) del artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, la MAIN debe analizar el impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en términos de mitigación y adaptación al mismo. En el presente caso, se considera que no la norma no tiene impacto por razón de cambio climático.

**7. EVALUACIÓN EX POST**

A la vista de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley del Gobierno, y el artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, por la naturaleza y contenido de la norma no se considera necesario llevar a cabo una evaluación ex post.